

DERECHOS POLÍTICOS DEL CIUDADANO Y SU PROTECCIÓN

MARTÍN NOÉ MATÍAS LÓPEZ

CONTENIDO

1.-INTRODUCCIÓN

2.- ¿QUÉ SON LOS DERECHOS POLÍTICOS?

3.-DERECHOS POLÍTICOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL

4.-MOVIMIENTOS HISTÓRICOS SOCIALES Y DERECHOS POLÍTICOS

5.-DERECHOS POLÍTICOS EN MÉXICO

6.- DERECHOS POLÍTICOS EN LAS REFORMAS ELECTORALES 2013 Y

MECANISMOS DE PROTECCIÓN

7.- CONCLUSIÓN

INTRODUCCIÓN

El Estado y el Derecho, tienen una relación mutua dentro de un régimen constitucional. Todo Estado de Derecho presupone un régimen democrático y una aplicación constante del principio de legalidad.

Nuestro Estado de Derecho no surgió de la noche a la mañana, es el fruto de una larga evolución histórica y producto de amplias e intensas luchas sociales. La Constitución es la Ley suprema del Estado, que estructura los órganos del mismo, que define el régimen político y que tutela los derechos fundamentales del hombre. En la Constitución se determina la forma de gobierno, la organización y atribuciones de los poderes públicos y las garantías que aseguran los derechos del hombre y del ciudadano.

Ahora bien, la propia Constitución plantea la introducción de derechos políticos y las acciones, competencias, procedimientos, órganos que conozcan de ellos, resoluciones, efectos de las sentencias y cumplimiento de los mandatos que contienen éstas, todo ello a través de un sistema electoral que permite confirmar, precisamente, nuestro ser nacional constitucionalmente declarado, ser soberanos, ser una Federación, ser una Democracia Representativa.

Así en 1996, el Constituyente Permanente, logra una reforma que desde el punto de vista jurídico, llega a la culminación deseada al someter los conflictos electorales al imperio de la Ley.

En dicha reforma, uno de los cinco temas fundamentales, es el fortalecimiento y protección de los derechos políticos de los ciudadanos, a través de la participación de los habitantes del Distrito Federal en la elección de un Jefe de Gobierno y de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como la creación del juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano.

¿QUÉ SON LOS DERECHOS POLÍTICOS?

Tradicionalmente los derechos políticos se han considerado como aquellas facultades que tienen las personas, en tanto que son titulares de la condición de ciudadanía, para incidir en la conformación y el funcionamiento de los órganos del Estado. En su faceta como derechos fundamentales, lo son en un doble sentido. Por un lado, como derechos subjetivos de carácter básico que constituyen el fundamento de otros derechos e instituciones; y, por otro lado, como derechos subjetivos establecidos en normas fundamentales (constituciones) del sistema jurídico y en instrumentos internacionales. Se ha reconocido comúnmente que los orígenes históricos de los derechos políticos se encuentran en la Revolución francesa. Con la derrota del absolutismo se genera la ficción de que los siervos se convierten en ciudadanos; entonces los derechos de ciudadanía son funcionales a la constitución del nuevo tipo de Estado de matriz burguesa. No obstante, dentro de este contexto, los derechos políticos nacieron sólo para una clase privilegiada, y su “ampliación” se ha dado gracias a las luchas sociales de distintos sectores: obreros, indígenas, mujeres, población negra, etc. Actualmente los migrantes son una subjetividad emergente que lucha por el reconocimiento de sus derechos políticos en diversos países. En tanto que no se les reconoce la condición de ciudadanía se les niegan los derechos aparejados.

“Los derechos políticos imponen a los estados tanto obligaciones de acciones afirmativas y otras por abstenciones. Como acciones positivas, los Estados están obligados a crear sistemas normativos adecuados para establecer los procedimientos de participación, crear las instituciones necesarias, y destinar el presupuesto adecuado para su funcionamiento. Como acciones negativas o abstenciones, el Estado tiene la obligación de no impedir u obstaculizar la participación ciudadana en la construcción y desarrollo del espacio político. Realizar un listado cerrado de derechos políticos sería una pretensión que con seguridad dejaría fuera algunos derechos, ya que estos derechos no son una expresión del

sistema político, sino la constitución de éste. Entre los derechos políticos clásicos encontramos el derecho a ser votado, el derecho a votar, el derecho a afiliarse a partidos políticos y el derecho a tener acceso al empleo público. Aunque como una precondition necesaria para el acceso a estos derechos se considera el reconocimiento de miembro de una comunidad política. Es decir, la tradición jurídica positivista sigue determinando que los Estados exijan la calidad de ciudadanía a las personas para reconocerles el acceso a los derechos políticos. De ahí se desprende el desconocimiento a ciertos derechos a los extranjeros, no sólo a participar de las decisiones públicas, en tanto que no son ciudadanos miembros de la comunidad política específica, pero además la negación incluso de los derechos sociales, tales como el acceso a servicios de salud, educación, etc. Esto significa que en la concepción de los Estados liberales burgueses modernos las personas no tienen derechos por ser, sino sólo mediante la impostación de la ciudadanía. El derecho al voto es uno de los derechos políticos que se ha vuelto clásico dentro de las democracias liberales. Este derecho puede ser ejercido de distintas formas; las más comunes son la elección de los gobernantes, el referéndum, el plebiscito, y la revocación del mandato.”¹

¹ Luévano Bustamante, Guillermo y Rosillo Martínez, Alejandro. Derechos políticos como derechos fundamentales. Regulación internacional y local, ed., Enero 2014, México, Industrias Gráficas del Tangamanga S:A de C:V, P. 5.

DERECHOS POLÍTICOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL

Los derechos políticos se encuentran reconocidos en diversos instrumentos internacionales, aunque suelen inscribirse dentro de la ideología liberal-burguesa. El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Declaración Universal) contempla el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y también reconoce el derecho de acceder a las funciones públicas del país en condiciones de igualdad. El mismo artículo reconoce que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Sin duda, esta disposición es importante pues reconoce a la voluntad del pueblo como el fundamento del poder político.

No obstante, limita esta voluntad popular tan sólo al derecho al voto, señalando que “esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.²

Es decir, la Declaración reduce la voluntad popular a la instauración de una democracia formal, no obstante que en el mismo artículo, en su primer párrafo, reconoce el derecho de participar de forma directa en el gobierno del país. Además, previamente en el artículo 20 se reconoce el derecho de reunión y asociación políticas, lo que se debe interpretar no sólo como un derecho civil sino como un derecho que se constituye en medio para ejercer otros derechos políticos.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto Internacional) amplía el contenido de los derechos políticos contenidos en la Declaración. El artículo 21 reconoce el derecho de asociación pacífica, y permite que se establezcan por ley restricciones que “sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la

² Luévano Bustamante, Guillermo y Rosillo Martínez, Alejandro. Derechos políticos como derechos fundamentales. Regulación internacional y local, ed., Enero 2014, México, Editorial, Industrias Gráficas del Tangamanga S:A de C:V, P. 10.

seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Estas limitaciones se deben interpretar de manera limitativa, siempre en búsqueda de que el derecho de asociación no sea limitado para impedir la participación política. No interpretarla en este sentido tiene como consecuencia que estos límites sean pretextos para que los gobiernos criminalicen la protesta social. En un sentido semejante debe contemplarse el contenido del artículo 22 referido al derecho de libertad de asociación. El artículo 25 del mismo Pacto es el que consagra explícitamente los derechos políticos clásicos.

Establece que todos los ciudadanos gozarán, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, y sin restricciones indebidas, del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; del derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y del derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. La Convención Americana de los Derechos Humanos (Convención Americana), en su artículo 15, reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. De la misma forma que el Pacto, establece que el ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. El artículo 16 establece el derecho de asociación, y de manera expresa lo refiere para asuntos políticos; también establece las mismas restricciones que el artículo anterior. El artículo 23 de esta Convención es el que reconoce los derechos políticos. Afirma que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; del

derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y el derecho de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. El párrafo segundo establece los casos en que la ley puede reglamentar el ejercicio de estos derechos: por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. La primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la violación a los derechos protegidos por el artículo 23 de la Convención fue en caso Yatama, en el año 2005 (Caso Yatama). Entonces señaló que el Estado había violado el derecho a votar al no permitir que personas propuestas por una organización indígena fueran inscritas para participar en elecciones municipales. Se trataba de una organización que agrupaba a diversas comunidades indígenas. La Corte consideró que el Estado había generado y aplicado normas electorales que restringían indebidamente el ejercicio del derecho al voto, por tratarse de una reglamentación discriminatoria. La acción del Estado violó los derechos políticos porque impedía que las comunidades indígenas fueran tratadas con igualdad en el espacio político. La Corte consideró que es obligación del Estado generar las condiciones y proveer de los mecanismos e instituciones óptimos para que los derechos políticos, establecidos en el Artículo 23 de la Convención, puedan ser ejercidos efectivamente respetando el principio de igualdad. Pero esta obligación no se reduce a la expedición de normas que reconozcan formalmente tales derechos, sino que se requieren medidas adecuadas para el pleno ejercicio, aplicando criterios que consideren la situación concreta en que se encuentran ciertos sectores sociales que pueda significar un obstáculo para su ejercicio. La Corte señaló que la participación pública de organizaciones distintas a los partidos, con miras a la realización de fines comunes, es fundamental para garantizar la expresión política legítima y necesaria cuando se trate de grupos de ciudadanos que de otra forma podrían quedar excluidos de esa participación. Además, observa que la Convención no condiciona el derecho de los ciudadanos a postularse como candidatos a cargos electivos al requisito de hacerlo a través de

un partido político. Indicó que como consecuencia de la violación al derecho de los candidatos a ser electos se privó a los electores de la opción política que aquéllos representaban. Esto limitó el ejercicio del derecho a votar e incidió negativamente en la más amplia y libre expresión de la voluntad del electorado, con desfavorables consecuencias para la democracia. La Corte señaló en ese caso: El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de funciones públicas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación (Caso Yatama). Para la Corte no es posible considerar los derechos en abstracto, como fórmulas vacías, neutrales, provistas para conducir la vida de ciudadanos abstractos, sino que se atiende a condiciones específicas.

La exigencia de participar a través de partidos políticos, que hoy se eleva como natural en las democracias de nuestra América, debiera aceptar las modalidades que sugiere la organización tradicional de las comunidades indígenas. No se trata, en lo absoluto, de eliminar el sistema de partidos, sino de atener, en la forma y términos que resulten razonables y pertinentes, a las condiciones de vida, trabajo y gestión de aquéllas. La admisión de estas condiciones y de las respectivas modalidades de participación política no se trasladan automáticamente a todos los medios ni van más allá del marco territorial, social y temporal en el que se plantean y resuelven” (García, 2007: 503). La Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Africana) establece los derechos políticos en sus artículos 10, 11 y 13. En el primero de ellos reconoce el derecho a la libertad de asociación. En el artículo 11 se reconoce el derecho de reunión, señalando que sólo estará sujeto a las restricciones que establezca la ley “decretadas en interés de la seguridad

nacional, la seguridad personal, la salud, la ética y los derechos y libertades de los otros”.³

De forma semejante que los otros instrumentos internacionales, el artículo 13 consagra explícitamente ciertos derechos políticos; a saber: el derecho a participar libremente en el gobierno de su país, ya sea de modo directo o a través de representantes libremente escogidos de conformidad con las disposiciones de la ley; el derecho a acceder al servicio público de su país; y el derecho a acceder a la propiedad y a los servicios públicos en estricta igualdad con todas las personas ante la ley.

MOVIMIENTOS SOCIALES Y DERECHOS POLÍTICOS

Los derechos políticos tradicionalmente se han pensado desde el contexto de la democracia representativa, la que se ha considerado como la vía de sustituir la democracia directa en las sociedades modernas masificadas. Se basa en la idea de que en sociedades numerosas y complejas es imposible la participación directa de todos los miembros en todas las decisiones colectivas por dos razones, básicamente: la imposibilidad material de hacerlo no es posible la reunión y deliberación de todos y la ausencia de conocimientos especializados de los ciudadanos para tomar decisiones técnicas. En este contexto, la democracia representativa buscaría evitar que las decisiones que deben ser tomadas por unos cuantos para que sean decisiones oportunas y eficaces— no terminen respondiendo a los intereses de las autoridades sino que contemplen todos los intereses posibles. No obstante, los derechos políticos constituyen elementos importantes para la legitimidad de los poderes públicos, lo que puede propiciar un uso ideológico de ellos. La interpretación y concepción limitadas de los derechos políticos reduce a la

³ Carta Africana sobre derechos humanos y de los pueblos <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1297.pdf?view=1> consultada el 26 de septiembre de 2013.

democracia a lo que la teoría hegemónica ha defendido. Como señala Boaventura de Sousa Santos, los principales elementos de esta teoría son: “la contradicción entre movilización e institucionalización; la valorización positiva de la apatía política; una idea muy destacada por Schumpeter, para quien el ciudadano común no tiene la capacidad o interés político sino para elegir a los líderes a quienes cabría tomar las decisiones; la concentración del debate democrático en la cuestión de los diseños electorales de las democracias; el tratamiento del pluralismo como forma de incorporación partidaria y disputa entre las elites; y la solución minimalista al problema de la participación por la vía de la discusión de las escalas y de la complejidad. La reducción de los derechos políticos a las estructuras de la democracia formal, de baja intensidad, contribuye a dos patologías: la patología de la participación, expresada en la apatía y en el abstencionismo electoral, y la patología de la representación, donde los ciudadanos se sienten menos representados por aquellos que eligieron.”⁴

Recursos informáticos Además, una democracia formal suele acarrear que los grupos más vulnerables socialmente, los sectores sociales menos favorecidos y las etnias minoritarias no logran que sus intereses sean representados en el sistema político con la misma facilidad que el de los sectores mayoritarios o económicamente más prósperos. Por otra parte, la democracia participativa implica que los gobernados no se limitan a votar cada cierto tiempo sino que tienen una injerencia directa en la decisión, ejecución y control de la gestión estatal en sus diversos niveles de gobierno. El voto ha sido el instrumento dominante en el ejercicio de las democracias formales. No obstante, dentro del experimentalismo constitucional en búsqueda de hacer involucrar a la ciudadanía en la toma de

⁴ SANTOS, Boaventura de Sousa, “Presupuesto participativo en Porto Alegre: Para una democracia redistributiva” en Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa, FCE, México, 2004.

decisiones, podemos mencionar los siguientes instrumentos: la iniciativa popular legislativa; el plebiscito; el referéndum; la consulta popular; la revocatoria del mandato popular; y los presupuestos participativos. Los procesos de globalización han generado un mayor interés por la democracia local y, en cierta forma, su incidencia sobre la conformación de los Estados nacionales ha permitido, en algunos países, la recuperación de tradiciones participativas. Si tomamos en cuenta que las experiencias más significativas de cambio en la forma de la democracia tienen su origen en movimientos sociales que cuestionan las prácticas sociales de exclusión a través de acciones que generan nuevas normas y nuevas formas de control del gobierno por los ciudadanos, entonces los derechos políticos deben ser entendidos desde la demodiversidad, es decir, desde el supuesto que no existe motivo para que la democracia sea asumida en una sola forma. “Demodiversidad”, entendida como la coexistencia pacífica o conflictiva de diferentes modelos y prácticas democráticas. En efecto, los nuevos derechos políticos deben ser instrumentos para la participación ciudadana. Por ésta debemos entender las prácticas regulares y que buscan básicamente tres resultados: a) la incidencia en las estructuras gubernamentales y en las políticas públicas; b) la transformación del orden social y político, y finalmente, c) la exigibilidad de los derechos humanos. El ejercicio de derechos políticos por parte de subjetividades emergentes (De la Torre, 2006) debe propiciar la ampliación del espacio político para posibilitar las prácticas que modifiquen las relaciones de opresión y explotación: “Los movimientos sociales estarían insertados en movimientos por la ampliación de los político, por la transformación de prácticas dominantes, por el aumento de la ciudadanía y por la inserción en la políticas de actores sociales excluidos”.⁵

⁵ DE LA TORRE RANGEL, Jesús Antonio, el derecho como arma de liberación en américa latina. Sociología jurídica y uso alternativo del derecho, UASLP-CEDHCENEJUS, San Luis Potosí, 2006. FIX-FIERRO, Héctor, Los derechos políticos de los mexicanos, UNAM, México, 2006, pp. 45 y 46 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Porrúa, México, 2007.

Por eso mismo, como señala Santos, las nuevas democracias deben, si tal perspectiva es correcta, transformarse en novísimos movimientos sociales, en el sentido de que el Estado debe transformarse en un espacio de experimentación distributiva y cultural. Es en la originalidad de las nuevas formas de experimentación institucional que pueden estar los potenciales emancipadores todavía presentes en las sociedades contemporáneas. Esos potenciales, para ser realizados, necesitan estar en relación con una sociedad que acepte renegociar las reglas de su sociabilidad creyendo que la grandeza social reside en la capacidad de inventar, y no de imitar”. Los derechos políticos deben, entonces, repensarse de tal forma que permitan ser instrumentos del pueblo para fortalecer la democracia participativa. En este contexto, deben ser derechos que permitan fortalecer tres aspectos, como señala Boaventura de Sousa Santos; estos son: (a) Fortalecer la demodiversidad: Los derechos políticos deben comprenderse no sólo desde una forma de democracia, sino que deben entenderse como instrumentos capaces de responder a la diversidad de democracias. (b) Fortalecer la articulación contra hegemónica entre lo local y lo global, y el apoyo global a las experiencias locales de participación. (c) Ampliar el experimentalismo democrático: Es necesario que los derechos políticos constituyan instrumentos para la multiplicación de experimentos de democracia. El experimentalismo democrático debe ir generando nuevos derechos políticos, y algunos de los derechos clásicos deben de ser reinventados, no tanto en la teoría, sino en la praxis de los sujetos emergentes.”⁶

Recursos informáticos. En este contexto, los derechos políticos no se agotan en el derecho a votar y ser votado, ni en el derecho a acceder a la función pública, sino que incluye diversos derechos como el de asociación, el de reunión, el de libre expresión, a la información, la iniciativa popular, la rendición de cuentas y la

⁶ SANTOS, Boaventura de Sousa, “Presupuesto participativo en Porto Alegre: Para una democracia redistributiva” en Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa, FCE, México, 2004.

realización de presupuestos participativos. El derecho de asociación, de reunión y a libre expresión son derechos políticos no sólo en función de los partidos políticos, sino en relación con las actividades y las luchas de los movimientos sociales. En el mismo sentido, los derechos de petición y a la información adquieren una mayor importancia cuando son utilizados por movimientos sociales como parte de sus estrategias de litigio y de defensa integral de derechos humanos. La iniciativa popular legislativa es el derecho de los ciudadanos de presentar a los organismos legislativos propuestas para la creación o reforma de leyes, incluyendo la reforma a la Constitución. La regulación a este derecho puede variar, como pedir algún porcentaje de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Además, para darle mayor fuerza a esta iniciativa, puede unirse con otras fórmulas de participación ciudadana, como en el caso de que siendo rechazada su aprobación por el órgano legislativo, ésta pueda ser llevada a plebiscito para su aprobación por parte de la ciudadanía. La rendición de cuentas es la otra faceta de la democracia representativa que puede utilizarse para empoderar al pueblo en las decisiones de gobierno. Por supuesto, que esto significa que los representantes podrán ser removidos o ratificados, dependiendo de su desempeño y la fidelidad con que promovió los intereses de sus representados. Los presupuestos participativos son una estructura y un proceso de participación comunitaria que se basa en tres grandes principios: (a) Todos los ciudadanos tiene el derecho de participar; (b) la participación es dirigida por una combinación de reglas de democracia directa y de democracia representativa, y se realiza por medio de instituciones cuya régimen interno es determinado por los participantes; (c) los recursos económicos son distribuidos de acuerdo con un método objetivo que se basa en criterios generales (definición de prioridades por los participantes) y de criterios técnicos. Los movimientos sociales no son propiamente una figura jurídica reconocida en los instrumentos normativos. Los movimientos sociales actuales adoptan diversas figuras jurídicas en aras de obtener el reconocimiento de una personalidad jurídica, incrementar su patrimonio a través de donaciones en dinero o en especie, o de acceder a una mejor interlocución política. Y lo más conveniente para la prosecución

de sus fines y dada la naturaleza de su dinamismo es que no estén regulados por ordenamientos estatales. Aunque es frecuente que adopten diversas figuras legales para asegurarse un estatuto político diferente, como se mencionará más adelante. Finalmente los movimientos sociales son la expresión de una inconformidad política, una insatisfacción material o una aspiración ideológica, compartidas por un número más o menos amplio de individuos que articulan estrategias de lucha y defensa en función de la instancia a la que se dirigen u oponen y del momento histórico que viven.

En México, uno de los movimientos sociales que fue un parte aguas definitivo en las reformas constitucionales en materia de Derechos Políticos fue la elección Presidencial de 1988 que fue uno de los más discutidos en la historia del país, en realidad las conciencias de los partidos y de la sociedad despertaron, a través de una participación extraordinaria que rebaso las expectativas del propio sistema tal y como estaba diseñado, pues sucedieron infinidad de actos que fueron desde la toma de tribuna hasta el bloqueo de cualquier posible solución, haciendo imposible que se pudiera dictaminar la validez de la elección presidencial. Así después de grandes debates, se convocó a una Reforma Política Nacional y se creó un nuevo mecanismo de solución a los problemas políticos.

DERECHO POLÍTICO EN MÉXICO

La ciudadanía en la ley El artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que poseen la condición de ciudadanía las personas que cuenten con la calidad de mexicanas y además hayan cumplido 18 años de edad y tengan “un modo honesto de vivir” (CPEUM). La mayoría de los países occidentales reconocen la mayoría de edad entre los 18 y los 21 años. Eso significa que las personas que alcanzan esa edad pueden acceder plenamente a los derechos civiles y políticos. El relativo consenso al respecto radica en la presuposición de que a dicha edad se cuenta ya con la madurez física e intelectual para la toma de decisiones no sólo del ámbito de lo privado, sino también del público. No obstante,

la honestidad como requisito de la ciudadanía constituye un criterio más ambiguo. Se reputa como necesario el criterio de la honestidad, que es, sin embargo, subjetivo, no taxativo ni jurídicamente probable, en tanto que se refiere a una categoría más bien cultural. Ese criterio sobre la honestidad –junto con otros más– opera igualmente para el reconocimiento de la calidad de ciudadanía potosina, que estipula la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí en su artículo 24 (CPSLP). “En términos reales se accede a la ciudadanía mexicana y a la ciudadanía potosina quienes tengan la nacionalidad mexicana y cumplan los 18 años de edad. Sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tímidamente plantea que México es una nación pluricultural sustentada en sus pueblos indios. En su artículo 2 la Constitución estipula diversos reconocimientos para la participación política de los pueblos indígenas, sin llegar al reconocimiento de la autonomía, tal como fue lo convenido en los “Acuerdos de San Andrés” (Rosillo, 2009). San Luis Potosí cuenta con una avanzada legislación sobre consulta indígena que sin embargo sigue inaplicada, por las consideraciones diferenciadas entre los criterios legales de demarcación territorial en localidades y la organización de los pueblos indígenas en comunidades (Ley de Consulta Indígena SLP).” ⁷

Por su parte el artículo 35 de Nuestra Carta Magna establece los derechos de los ciudadanos

“I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera

⁷ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/San%20Luis%20Potosi/wo62354.pdf> consultada el 26 de septiembre de 2013.

independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley; VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente: 1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: a) El Presidente de la República; b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión, 2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes; 3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.”⁸

⁸ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf> consultada el 26 de septiembre de 2013.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; 5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal; 6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y 7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

EL VOTO

Al acceder a la categoría ciudadana las personas obtienen el derecho a votar, y teóricamente a ser votadas, según dispone la Constitución General de la República en su artículo 35 (CPEUM). Dice la Constitución General en su artículo 36, relativo a las obligaciones para las personas ciudadanas del país que una de ella es “votar en las elecciones y consultas populares” (CPEUM); El sufragio es el derecho que otorga la ley a los ciudadanos para participar en la vida política del Estado y constituye un deber cívico y legal que se ejerce a través del voto para expresar la voluntad soberana del individuo.

DERECHOS POLÍTICOS EN LAS REFORMAS ELECTORALES 2013 Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN

Derechos políticos tras la Reforma Electoral de 2013 El 8 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de una nueva Reforma Constitucional en materia electoral en México, cuyos promotores presentaron como una Reforma Política. Las reformas jurídicas más importantes en materia

Electoral han diseñado el modelo de participación política de la ciudadanía mexicana.

Las más importantes modificaciones legales en el campo electoral durante el siglo XX han sido el reconocimiento el voto femenino de 1953, la inclusión de minorías políticas mediante formas de representación plurinominal de 1977, y la ciudadanización de los órganos electorales de 1996. Ésta, en particular, se presentó como una reforma que fortalece los mecanismos de la democracia; en el ámbito nacional el voto femenino se reconoció en 1953 aunque fue efectivo a partir de 1958.

“La Reforma Electoral de 2013 recoge aspiraciones de organizaciones de la sociedad civil en torno a la inclusión y reconocimiento de formas de participación política directa y ciudadana. Sin embargo, la lógica de los partidos políticos no es la lógica de las organizaciones de la sociedad civil. De ahí se deriva el hecho de que las reformas tengan ciertos requisitos que regulan su ejercicio. Entre las figuras de democracia directa que se incluyen en esta reforma se encuentran las candidaturas independientes o ciudadanas.

Hay cierto consenso entre diversas expresiones políticas en el país sobre la necesidad de que las personas tengan acceso al derecho a ser votadas tras postularse para los cargos de elección popular sin intermediación de partidos políticos, cuya forzosa intervención fue prevista a mediados del siglo XX lo que se tradujo en una especie de absolutismo partidista.”⁹

La regulación de las candidaturas independientes tendría que prever en todo caso, desde nuestra perspectiva, el fortalecimiento de los medios de fiscalización, y asegurar el reparto más equitativo para el financiamiento de las campañas, de otro modo, las candidaturas ciudadanas corren el riesgo de ser ocupadas y llevadas al triunfo sólo por quienes poseen más medios económicos o por personas vinculadas

⁹ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf> consultada el 26 de septiembre de 2013.

con poderes fácticos, incluso delincuenciales. Si entre los partidos encontramos inequidades, en las candidaturas ciudadanas el problema podría agudizarse. Es preciso para su cabal ejercicio que las autoridades electorales sean estrictas en el control de los recursos públicos y los gastos de campaña. Las candidaturas independientes son necesarias, pero reguladas de manera que permitan a la ciudadanía acceder efectivamente al ejercicio de sus derechos políticos, no que resulten una mera simulación discursiva.

Otra figura destacada en esta Reforma es el de la Iniciativa Popular, que en teoría reconoce la capacidad a la sociedad de presentar iniciativas de ley ante el poder legislativo federal. El texto legal que incluye nacionalmente la modificación antedicha estipula que se requiere al menos el 0.13% del padrón electoral, esto es, cerca de 103, 000 personas.

Un caso semejante sucede con la otra figura novedosa en la reforma reciente, la consulta popular, mediante la que ahora se reconoce que la ciudadanía puede llamar y participar en una consulta sobre temas de relevancia social, con la condición de que se solicite por al menos, cerca de un millón y medio de personas, y sólo tendrá efectos vinculatorios jurídicamente cuando participe en ella el 40% de la lista nominal. Hay entonces una Reforma Electoral que puede tener los alcances de Reforma Política si aseguramos al menos dos cosas, a nuestro parecer: 1. Una

regulación debidamente apropiada que salvaguarde las aspiraciones de las organizaciones de la sociedad civil que la impulsaron con ánimo democrático; ya que una legislación ambigua o poco clara es inservible y deja margen a interpretaciones difusas o hasta contradictorias; y 2. Si aseguramos que la sociedad participe más activamente en la vida pública; el desencanto con el régimen de los partidos políticos y en ocasiones con los organismos electorales, más los resabios de la cultura política clientelar, desalientan la participación política de una parte de la sociedad a tal grado que en los procesos electorales recientes el abstencionismo supera el 50% de los padrones electorales.

EJEMPLO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los requisitos para la procedencia del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano están previstos en el artículo 79 (y no en el 80) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues del contenido del primero se obtiene que para la procedencia, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: a) que el promovente sea un ciudadano mexicano; b) que este ciudadano promueva por sí mismo y en forma individual; y c) que haga valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos políticos: de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Los primeros dos elementos no requieren mayor explicación. Respecto al último cabe destacar que, de conformidad con el texto del precepto en comento, para tenerlo por satisfecho, es suficiente con que en la demanda se aduzca que con el acto o resolución combatido se cometieron violaciones a alguno o varios de los derechos políticos mencionados, en perjuicio del promovente, independientemente de que en el fallo que se llegue a emitir se puedan estimar fundadas o infundadas tales alegaciones; es decir, el elemento en comento es de carácter formal, y tiene como objeto determinar la procedencia procesal del juicio, en atención a que la única materia de que se puede ocupar el juzgador en él consiste en dilucidar si los actos combatidos conculcan o no los derechos políticos mencionados, y si el promovente no estimara que se infringen ese tipo de prerrogativas, la demanda carecería de objeto en esta vía. En tanto que de la interpretación gramatical del vocablo “cuando”, contenido en el apartado 1 del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se aprecia que está empleado como adverbio de tiempo y con el significado de “en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que”, pues en todos los incisos que siguen a esta expresión se hace referencia, a que el juicio queda en condiciones de ser promovido, al momento

o tiempo en que hayan ocurrido los hechos que se precisan en cada hipótesis, como son la no obtención oportuna del documento exigido por la ley electoral para ejercer el voto, después de haber cumplido con los requisitos y trámites correspondientes; el hecho de no aparecer incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, luego de haber obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso anterior; una vez que se considere indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio; al momento en que estime que se violó su derecho político electoral de ser votado, con la negación de su registro como candidato a un cargo de elección popular, propuesto por un partido político; al conocer la negativa de registro como partido político o agrupación política, de la asociación a la que se hubiera integrado el ciudadano para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, si consideran indebida tal negación; y al tiempo en que, al conocer un acto o resolución de la autoridad, el ciudadano piensa que es violatorio de cualquiera otro de los derechos político electorales no comprendidos en los incisos precedentes, pero sí en el artículo anterior. Consecuentemente, para considerar procedente este juicio es suficiente que la demanda satisfaga los requisitos del artículo 79 citado, aunque no encuadre en ninguno de los supuestos específicos contemplados en el artículo 80.

Tercera Época:

1000812. 173. Sala Superior. Tercera Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. VIII. Electoral Primera Parte - Vigentes, Pág. 217.

“Recurso de apelación. SUP-RAP-015/99. Ismael Enrique Yáñez Centeno Cabrera. 10 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-152/99. Hermino Quiñónez Osorio y Ángel García Ricárdez, quienes se ostentan como representantes de la Asamblea Comunitaria del Municipio de Asunción Tlacolulita, Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca. 11 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC036/99. Héctor Hernández

Cortinas y Juan Cardiel de Santiago. 17 de diciembre de 1999. Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión celebrada el doce de mayo de dos mil, aprobó por mayoría de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral.”¹⁰

¹⁰ Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 17 y 18.

CONCLUSIÓN

En el presente artículo, se realiza una recopilación de los aspectos más importantes y relevantes de la evolución que han tenido en nuestro país los Derechos Políticos del ciudadano.

Para ello, se parte del conocimiento de la naturaleza de los derechos fundamentales vinculados con los derechos políticos de los ciudadanos, los cuales son considerados como derechos fundamentales, tales como, el derecho a votar en elecciones populares y ser votado a cargos de elección popular, derecho de asociación política, derecho a pertenecer a un partido político, y a integrar autoridades electorales en las entidades federativas, dichos derechos también son contemplados como derechos fundamentales por diversos tratados internacionales, lo anterior, con la finalidad de difundir y divulgar el conocimiento, para con ello buscar solucionar la problemática de falta de aplicación de esa garantía constitucional.

Los derechos políticos constituyen elementos importantes para la legitimidad de los poderes públicos, pues en ellos se supone que está manifestada la voluntad de los ciudadanos al elegir a las personas y autoridades que son sus representantes y que constituyen una sociedad democrática.

Así, en términos generales, fomentar la participación ciudadana en las decisiones de gobierno se traduce en mayores márgenes de gobernabilidad lo que permite avanzar formalmente en la democratización de la vida política Nacional, en este sentido, tal participación debe ser vista como una contribución a los procesos de transición a la democracia y un fortalecimiento a la soberanía del país, ya que como nuestra constitución lo establece dicha soberanía radica en los ciudadanos.

FUENTES DE INFORMACIÓN:

- 1.- ROSILLO MARTÍNEZ, Alejandro y LUEVANO BUSTAMANTE, Guillermo, Derechos políticos como derechos fundamentales, regulación Internacional y local, México, enero 2014.PP. 10 y 11.
- 2.- OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO, José Fernando, Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano, pp.218, 219 y 220,
- 3.-CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS art. 35, pp. 141,142,143 y 144. Febrero año 2017, 2ª edición.
- 4.-DE LA TORRE RANGEL, Jesús Antonio, el derecho como arma de liberación en américa latina. Sociología jurídica y uso alternativo del derecho, UASLP-CEDHCENEJUS, San Luis Potosí, 2006. FIX-FIERRO, Héctor, Los derechos políticos de los mexicanos, UNAM, México, 2006, pp. 45 y 46 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Porrúa, México, 2007.
- 5.-ROSILLO MARTÍNEZ, Alejandro y DE LA TORRE RANGEL, Jesús Antonio, Acuerdos de San Andrés. Texto, estudio introductorio, comentarios y referencias, UASLP-CEDH-CRT-CENEJUS, San Luis Potosí, 2009.
- 6.-SANTOS, Boaventura de Sousa, “Introducción: Para ampliar el canon democrático” en Boaventura de Sousa Santos (Coord.), Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa, FCE, México, 2004.
- 7.-SANTOS, Boaventura de Sousa, “Presupuesto participativo en Porto Alegre: Para una democracia redistributiva” en Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa, FCE, México, 2004. Recursos informáticos
- 8.-Carta Africana sobre derechos humanos y de los pueblos <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1297.pdf?view=1> consultada el 26 de septiembre de 2013.

9.-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf> consultada el 26 de septiembre de 2013.

10.-Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/San%20Luis%20Potosi/wo62354.pdf> consultada el 26 de septiembre de 2013.

11.-Convención Americana sobre Derechos Humanos http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm consultada el 26 de septiembre de 2013 1000812. 173.

12.-Sala Superior. Tercera Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. VIII. Electoral Primera Parte - Vigentes, Pág. 217.

13.-FIX-FIERRO, Héctor, Los derechos políticos de los mexicanos, UNAM, México, 2006, pp. 45 y 46 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Porrúa

14.-Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 17 y 18.